

Santiago, dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, la Ministra en Visita Extraordinaria, doña Paola Plaza González, con fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Luis Alberto Castillo González, a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Javier Alberto Salinas Velásquez, ocurrido en esta ciudad entre el 28 y el 30 de junio de 1974, con cumplimiento efectivo, más las costas de la causa.

Impugnada dicha decisión, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso presentado por el sentenciado, procedió a confirmar la misma, con declaración que se reduce la condena impuesta al sentenciado Castillo González a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, como autor del mismo delito.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujo el recurso de casación que pasa a examinarse, respecto del que se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que en el considerando tercero del fallo de primer grado se fijaron los hechos objeto de juzgamiento:

“a) Javier Alberto Salinas Velásquez, de 47 años a la data de los hechos indagados, casado, profesor de educación básica, sin militancia política conocida, en circunstancias que el 28 de junio de 1974 se encontraba en compañía de otras



personas al interior de una fuente de soda ubicada en calle Mac-Iver con Avenida Libertador Bernardo O'Higgins de la comuna de Santiago, fue detenido por una patrulla militar liderada por el Teniente del Ejército de Chile Luis Alberto Castillo González, quien sin orden judicial ni administrativa alguna lo trasladó contra su voluntad hasta el Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" y lo habría entregado a la guardia del recinto, quienes lo ingresaron y mantuvieron encerrado en ese recinto militar de manera arbitraria e ilegal.

b) El día 30 de junio de 1974, el aludido Salinas Velásquez habría sido encontrado muerto en su lugar de cautiverio, cuya autopsia reveló que su deceso se produjo a causa de asfixia por ahorcamiento, pero una vez que fueron analizados sus restos óseos pudo observarse que en ellos se evidenciaban fracturas peri-mortem en la parrilla costal y en las vértebras lumbares, no informadas oportunamente en el Protocolo de Autopsia, las que a juicio de los expertos sugieren traumas contusos, recientes y coetáneos con su muerte, recibidos durante el periodo que permaneció privado de libertad, y que necesariamente, por sus características, debieron afectar tejidos blandos, nada de lo cual se consignó al momento de su deceso, a pesar de su demostrada existencia”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de la sentencia de primera instancia, configura la existencia de un delito de secuestro calificado de la víctima ya indicada, considerando que el mismo, además, conforma un crimen de lesa humanidad, aspectos que se mantuvieron en la revisión ejecutada por el tribunal de alzada;

3°) Que, por parte de la apoderada del sentenciado Castillo González, se dedujo un recurso de casación en el fondo, el cual se hace consistir en la causal



del numerales 2 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación del inciso 1° del artículo 535 y 536, del Código de Procedimiento Penal; artículos 764, 765, 770 y 777 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 2, 15 N° 1, 141, incisos 1° y 3° del Código Penal, Decreto Ley N°23 de 1973, y; artículos 5, 6, 283, 423, 424 y 425 del Código de Justicia Militar.

En particular, cuestiona que, en primera instancia, existió una construcción errada sobre la culpabilidad atribuida al sentenciado, señalando que existieron palmarios errores en ello, lo cual repercutió en la condena impuesta, asegurando que las presunciones de culpabilidad usadas carecen de la multiplicidad y gravedad que se requiere, lo que no fue corregido por los sentenciadores de segundo grado, al contrario, acusa que ellos infringieron de manera grave y reiterada las normas de orden y de derecho público tenidas como reglas reguladoras de la prueba. Así, entiende el recurrente que la muerte de la víctima no pudo ser atribuida a ninguno de los integrantes de la unidad que participó en la detención del afectado, sumado al hecho que aquel fue entregado la autoridad militar correspondiente, esto es, al comandante del regimiento, con lo cual cesó toda obligación de cautela del aprehensor y, por ende, sostiene que aquello que acontezca con el detenido es responsabilidad de aquellos que lo permitieron entrar en su custodia pero, en ningún caso, al sentenciado recurrente.

Por otro lado, denuncia lo que considera imprecisiones del peritaje evacuado y que sirvió para controvertir el informe de autopsia elaborado en la época de los hechos, aseverando que las lesiones *pre mortem* consignadas, bien pudieron tener su causa en cuestiones naturales no atribuibles a terceros, lo que descarta la participación de su mandante en la muerte de la víctima.



En consecuencia, solicita *“declarar que la detención fue regular y legal, en subsidio se le subsuma en el artículo 148, que en definitiva se traduzca en una pena de prisión, atendida la existencia de dos atenuantes y ninguna agravante, desde que el deceso de la víctima no es atribuible a ningún título al encartado, porque la redacción del artículo 141 inciso tercero, que impone mayor pena por la prolongación de la detención y/o grave daño subsecuente a la persona del ofendido, no es aplicable en la especie” (sic);*

4º) Que, previo al estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ello. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de



determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria y/o alternativa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro, se coloca al tribunal en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, tal como se ha sostenido en otros pronunciamientos recientes, entre ellos los Roles N° 69.149-2023 y 141.995-2023, lo cierto es que el recurrente plantea causales que, en su desarrollo, resultan incongruentes y obstaculizan a una acertada inteligencia pues, al revisar el arbitrio, de partida, se constata un confuso tratamiento sobre las causales impetradas, no existiendo ninguna claridad cuando se argumenta por una u otra causal, sino que sólo se evidencia una disconformidad con el resultado. Es más, incluso obviando lo intricado de los argumentos planteados, se puede advertir que, por medio del reproche contenido en la causal 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, la recurrente plantea errores asociados a la valoración entregada a informes periciales evacuados a propósito de la autopsia elaborada a la época de los hechos, sin



embargo, no detalla de forma clara de qué forma se han visto afectadas las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de la participación fijada por el tribunal, asegurando que la muerte del afectado no pudo ser atribuida a ninguno de los miembros de la unidad que efectuó la detención. En tanto, desatendiéndose de esa premisa, con la segunda causal, postula un error de derecho en lo que se refiere a la calificación jurídica de hechos en los que, previamente, postulaba una falta de participación, es decir, existe una brecha argumentativa de toda una línea de defensa, lo que se transforma en un defecto insalvable en su entablamiento, en particular a la forma en que vienen planteados los argumentos, los que resultan de todo incompatibles entre sí y afectan, en definitiva, en la construcción y coherencia que se debe exigir a un recurso de esta clase.

A lo anterior, cabe mencionar que las argumentaciones que sostienen la impugnación descansan en una suerte de revalorización de los medios probatorios, buscando proponerle a este tribunal de casación, una nueva estimación de los hechos, una revaloración de los insumos probatorios, buscando, en definitiva, una conclusión diversa de aquella asentada en la instancia, lo que, como se viene sosteniendo, está vedado en las condiciones planteadas. En tal sentido, como explica el autor Waldo Ortúzar L., en su obra “Las Causales del Recurso de Casación en el Fondo en Materia Penal” (Editorial Jurídica, 10^a Edición, 27 de octubre de 1967, pág. 392 – 393), “... *no se entra a establecer la existencia de los hechos mediante nuevas pruebas, sólo se examina si la prueba rendida autoriza legalmente las declaraciones de hecho de la sentencia*”.

En este plano, siguiendo con los yerros remarcados, es importante reiterar las características de formalidad y de derecho estricto que vienen asociadas a



esta clase de impugnaciones, lo que también se vincula con una precisión clara de las normas legales que se denuncian como amagadas y, en este caso, el recurrente apunta una serie de normas legales que no son leyes reguladoras de la prueba, lo cual recalca las falencias que caracterizan al libelo planteado, a lo cual se debe sumar que, lo que se cataloga como vicios en la construcción de las presunciones, en realidad, sólo se sustenta en una argumentación basada en una constatación formal –no de fondo–, en donde el articulista pretende una nueva tasación que, en esta sede, resulta inadecuada debiendo ser descartado el recurso en estudio;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación en el fondo, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de un vicio de forma en la sentencia de segunda instancia, en particular cuando ella se refiere a la aplicación de la Ley N°18.216, en asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad;

7º) Que, para estos efectos, resulta relevante lo que dice relación con los motivos que se tuvieron en cuenta para denegar los beneficios que contempla la ley que establece las sanciones como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. En efecto, el fallo del tribunal de segundo grado, aun cuando el tramo penal lo permitía, deniega la concesión de una pena alternativa basado en un informe presencial negativo y, además, en razón del móvil, naturaleza y gravedad del delito por el cual ha sido sancionado, el cual confirma un ilícito de lesa humanidad, lo cual infiere de los instrumentos internacionales que menciona y que, en concepto de los *jurisdicentes*, exigen de un castigo ejemplar y proporcional a la gravedad del bien jurídico que han lesionado, puesto que afectan a toda la comunidad internacional;



8º) Que, de partida, atento al tramo punitivo de la pena impuesta al sentenciado – cuatro años de presidio – conviene resaltar que, a su respecto, sólo cabría la imposición de la libertad vigilada intensiva, en la cual se requiere la elaboración del llamado informe presentencial, el cual responde a uno de varios de los elementos que deben ser valorados para determinar su procedencia y, en ningún caso, su resultado es determinante ni concluyente, sino que es parte de los insumos que deben colacionarse en una decisión de esta clase, al igual que aquellos a los que hacen referencia los sentenciadores de segundo grado, como lo son el móvil, naturaleza y gravedad del delito, aspectos a los que también debe agregarse –aun cuando no se indiquen–, los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible.

Ahora, en lo que se refiere a la procedencia de esta clase de alternativas de cumplimiento a la pena impuesta, no existe norma legal que impida su concesión en delitos de lesa humanidad o crímenes de esta clase, en tanto que, de los instrumentos internacionales aludidos, como bien se consigna, sólo se infiere la necesidad de ponderar este aspecto al momento de dictarse la sentencia, revisando si es o no plausible la necesidad de conceder beneficios alternativos de la pena, reconociendo siempre que se trata de una facultad del tribunal, el que debe sopesar y pronunciarse sobre todos y cada uno de los elementos previamente indicados, lo cual se erige como una necesidad en una sentencia penal que priva de la libertad ambulatoria a un sentenciado a cuyo respecto, por el tramo penal, no le está vedada la posibilidad de concesión de esta clase de penas alternativas, máxime si, además, se le ha reconocido la atenuante de colaboración



sustancial, lo cual exigía de una fundamentación completa que, en este extremo, no se encuentra pues, por un lado, no se abarcan todos los aspectos que precisa el artículo 15 de la ley N°18.216 y, además, las razones legales invocadas, en particular los instrumentos internacionales, no prohíben la concesión de penas alternativas en esta clase de procesos, con lo cual existe una ausencia de razonamientos en este aspecto, el que tiene influencia en lo dispositivo del fallo, encontrándose, así, incurso en el vicio de casación formal, en el sentido que la sentencia definitiva no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, causal prevista en el numerando 9° del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, al no haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley, en relación con los numerandos 4° y 5° del artículo 500 del mismo cuerpo legal;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, puede este tribunal, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho, únicamente en lo que se refiere a la procedencia de la aplicación de la ley N° 18.216, lo cual representa el motivo para proceder de oficio.

Y, de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y, 775 del Código de Procedimiento Civil,



se **RESUELVE**:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo, interpuesto en favor del condenado Luis Alberto Castillo González, presentado por su defensa, don Enrique Ibarra Chamorro, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, se invalidará de oficio la referida sentencia, únicamente, en la parte indicada en dichos motivos, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Lo anterior, **fue adoptado con el voto en contra del Ministro señor Llanos y el Abogado Integrante señor Gandulfo**, quienes se opusieron al ejercicio de la facultad oficiosa y, en su lugar, estuvieron por desestimar el recurso de casación en el fondo, para lo cual tuvieron en consideración los siguientes fundamentos:

1º) Que tal como establece el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, podrá obrarse de oficio e invalidar una sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma.

2º) Que, en este caso, tal como se advierte, existe cierta exigencia asociada al recurso, que, por cierto, no se cumple en la especie, pues ni siquiera



hay una mención del capítulo de nulidad que se pretende aplicar de manera oficiosa.

3º) Que, además de lo mencionado, una actuación de oficio como la efectuada, tal como se razona en la decisión de esta Corte, supone, o bien la ausencia de consideraciones, o que existiendo, ellas sean contrapuestas, supuestos que no ocurren en la especie. Es más, en este caso, la sentencia menciona con claridad los motivos para descartar el aludido beneficio que, por cierto, resultan acertados y contemplan un análisis de todos y cada uno de los requisitos legales relativos a la procedencia de la pena sustitutiva requerida.

4º) Que, a lo dicho, más allá de lo formal, no puede perderse de vista que estamos en presencia de una facultad de parte de los adjudicadores penales, quienes están autorizados para determinar si otorgan o no alguna de las penas sustitutivas que contempla dicho cuerpo normativo, siendo obligados, eso sí, a entregar los fundamentos de su decisión, lo que sí se cumple en el fallo en estudio.

Por de pronto, cabe recalcar que esta Corte ya se ha pronunciado sobre la procedencia de un recurso de casación en la materia que se relaciona con las penas sustitutivas y se ha dicho que: *“La declaración del beneficio de la suspensión de la pena, consecuencial a una sentencia condenatoria, no constituye un pronunciamiento integrante de tal fallo, supuesto que recae sobre una situación que es, además, tangencial al juicio, el que tuvo por objeto comprobar la perpetración de un acto punible y establecer la persona responsable para imponer el castigo que resulte ser atinente, o su absolución; y, en esa forma,*



los pronunciamientos sobre la remisión no podrán tener influencia en lo dispositivo de tales fallos...”.

5º) Que, en este orden de cosas, los disidentes consideran que es una facultad del tribunal de fondo la concesión o no de una pena sustitutiva y ello no forma una decisión que pueda ser revisable por esta vía, cuestión que ya han consignado en la disidencia contenida en el proceso Rol N° 230.511-2023, todo lo cual conduce a desestimar el recurso en estudio.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos y la disidencia por sus autores.

Regístrese.

Rol N°141.759-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 16 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 16/06/2025 12:33:51

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 16/06/2025 12:33:52

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 16/06/2025 12:33:53

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 16/06/2025 12:33:53



EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 16/06/2025 12:33:54



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 16/06/2025 13:09:51

En Santiago, a dieciséis de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 16/06/2025 13:09:51



Santiago, dieciséis de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia recurrida, con excepción de los razonamientos 11° y 12°, los cuales se eliminan.

Y, teniendo, además, presente:

1°) Que, en lo inmediato, resulta necesario reflexionar acerca del tipo penal por el cual ha sido condenado Castillo González, el que corresponde a la figura del secuestro calificado contemplada en el inciso primero y tercero del artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, toda vez que, como se expresa en el considerando cuarto del fallo de primera instancia, los hechos se subsumen en dicho ilícito debido a que el detenido fue lesionado de manera grave, al punto que fallece bajo la custodia de agentes estatales, lo cual, al día de hoy, se podría asimilar a los ilícitos que contempla el artículo 150 A o el 150 B, ambos del Código Penal, por tanto, conforme con el inciso 3° del artículo 1 de la ley N° 18.216, existiría una prohibición de ejercer la facultad que establece dicho cuerpo legal.

2°) Que, no obstante lo anterior, tal como fuere desarrollado en decisiones anteriores de esta Corte, dichas figuras penales no son asimilables al delito por el que ha sido condenado el autor de los hechos, de manera que la prohibición es sólo aparente pues ellas fueron incorporadas, recién, por las modificaciones incluidas mediante la ley N° 19.567, las cuales son posteriores a los hechos luctuosos, debiendo recordar que, en materia penal, está vedada la opción de



interpretar por analogía *in malam partem*, de allí que sí existe la opción de aplicar las penas sustitutivas que establece la ley N° 18.216.

3°) Que, asentado lo anterior, ante el tramo punitivo anticipado, corresponde la aplicación de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, cuya normativa legal –artículos 14 a 19 de la ley N° 18.216– establece exigencias que, al encausado cumple en su totalidad. Primero, tal como consta a fojas 1798, el encausado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Segundo, lo referente a la conducta anterior y posterior al hecho punible, lo cierto es que, al encausado, tal como indica el tribunal de alzada, le ha sido reconocida la minorante de colaboración sustancial, aspecto que, incluso, ha sido relevante para establecer la participación criminal de aquel. Por otra parte, lo que se refiere a los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, si bien es cierto que el informe presentencial de Gendarmería de Chile, el cual corre a fojas 1802, no recomienda la concesión de alguna pena sustitutiva, a la lectura de su contenido, ella no refiere antecedentes categóricos que sustenten una conclusión de esa clase. Lo mismo ocurre con la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, aspectos que son valorados en una decisión de esta clase, estimando que parece más aconsejable, en el caso del sentenciado, una intervención en un régimen alternativo de cumplimiento, sobre todo porque se trata de un encausado que, además, no aparece siquiera encausado en procesos penales posteriores.

4°) Que, en este orden de cosas, las reflexiones precedentes permiten descartar el informe fiscal en los términos que viene propuesto.



Por estas consideraciones, se **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, que rola de fojas 1.893 a fojas 1.963, **CON DECLARACIÓN** que se reduce la condena impuesta al sentenciado Luis Alberto Castillo González a la de **CUATRO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como **AUTOR** del delito de **SECUESTRO CALIFICADO** de Javier Alberto Salinas Velázquez, ocurrido en esta ciudad entre el 28 y 30 de junio de 1974.

En virtud de los fundamentos 1° a 3° de esta sentencia de reemplazo, se sustituye la sanción principal por la pena sustitutiva de **LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA**, por el mismo tiempo de la condena, quedando el condenado sujeto al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada que efectuará el delegado de Gendarmería de Chile, quien elaborará un plan de acuerdo a las exigencias que establece el inciso 2° del artículo 16 de la ley 18.216, el que deberá ser aprobado por el tribunal encargado del control de la impuesta.

Conforme a lo resuelto, el sentenciado deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda, de acuerdo con el domicilio fijado, y debiendo, además, cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en la audiencia que se fijará al efecto y bajo las condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 17 de la Ley N° 18.216, esto es, residencia en un lugar determinado; sujeción a la



vigilancia y orientación permanentes del delegado que para dicho fin sea determinado y el ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención individual. Deberá, si fuere del caso, cumplir programas formativos laborales, ello de conformidad con lo expuesto en artículo 17 ter de la citada ley.

El sentenciado tendrá que comparecer ante Gendarmería de Chile para la confección del plan de intervención individual y, a su turno, el juez de ejecución oficiará al mismo organismo penitenciario a fin de comunicar lo antes resuelto y que éste disponga la designación del delegado de Libertad Vigilada Intensiva que ordena la Ley 18.216 y dentro del plazo legal, con la finalidad que evacúe el aludido plan.

Una vez aprobado el plan de intervención y ejecutoriada la presente sentencia, el recluso deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda, dentro del plazo de cinco días, y para el caso de su incumplimiento o quebrantamiento, se le apercibe con el hecho que, el Tribunal competente, podrá despachar inmediatamente una orden de detención en su contra y determinar las consecuencias que se le pondrán imponer de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 18.216 para el evento de incumplimiento del régimen de ejecución de la pena sustitutiva.

Comuníquese a Gendarmería de Chile dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que la sentencia se encuentre firme y se encuentre aprobado el plan la imposición de la pena sustitutiva.

Para los efectos de una eventual revocación de la pena sustitutiva deberá considerarse como abono el tiempo que el sentenciado estuvo privado de libertad



debido a esta causa, esto es, los tres (3) días que permaneció en prisión preventiva según consta en las certificaciones de fojas 1669 y 1690, desde el 26 al 28 de noviembre de 2019.

Cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro señor Llanos y el Abogado Integrante señor Gandulfo, quienes estuvieron por desestimar la concesión de alguna pena sustitutiva, ello en virtud de los fundamentos apuntados en la disidencia planteada en la sentencia de casación, los que han de entenderse reproducidos para estos efectos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos y el voto en contra por sus autores.

Rol N°141.759-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. Santiago, 16 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 16/06/2025 12:33:55

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 16/06/2025 12:33:56



MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 16/06/2025 12:33:56

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 16/06/2025 12:33:57

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 16/06/2025 12:33:57



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 16/06/2025 13:09:52

En Santiago, a dieciséis de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 16/06/2025 13:09:53

